

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO CINCUENTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO: 11001 – 4003 - 054 – **2016-00737-00**
DEMANDANTE: **BANCO DE BOGOTÁ S.A.**
DEMANDADO: **JUAN CARLOS PARRA MOROS**
PROCESO: **EJECUTIVO**
TRAMITE: **SENTENCIA**

Teniendo en cuenta que en el presente caso se cumple la hipótesis contemplada en el numeral 2 del artículo 278 del Código General del Proceso, procede el Despacho a emitir sentencia anticipada escrita dentro del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Las pretensiones y los hechos

Mediante demanda radicada el 12 de agosto de 2016 la entidad Banco de Bogotá S.A., con base en el pagaré número 72273595 solicitó que se librara mandamiento de pago contra Juan Carlos Parra Moros por \$30´678.906 correspondientes al capital allí contenido, cuyo pago era exigible el 25 de julio de 2016.

Así mismo, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios que la referida cantidad genere hasta que se logre su satisfacción.

II. DESARROLLO PROCESAL

El 22 de agosto de 2016 se libró mandamiento de pago por la suma reclamada por la entidad bancaria (fl 19), así como también por los intereses de mora que las referidas obligaciones generan desde su exigibilidad. Dicha providencia se notificó mediante estado publicado el 23 de agosto de la misma anualidad.

Teniendo en cuenta que los actos que la entidad acreedora adelantó con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 291 y 292 del Código General del Proceso no surtieron efecto por cuanto la dirección que informó en el escrito de demanda no existe, en auto de 9 de marzo de 2017 se decretó el emplazamiento del obligado (fl 38).

La referida publicación se surtió en debida forma el 19 de marzo de 2017, razón por la cual, una vez efectuada su inclusión en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, se designó curador *ad-litem* para que defendiera sus derechos.

El 23 de septiembre de 2019, el doctor Germán Suarez Montañez, curador designado en el asunto, se notificó de la orden de pago (fl 88), y a través de escrito radicado el 27 de septiembre del 2019 formuló excepción de prescripción.

Surtido el traslado del referido medio exceptivo, en auto de 5 de abril de 2021, se enlistó el proceso para dictar sentencia anticipada, previo de otorgársele a las partes un término para que presentaran alegatos de conclusión.

En vista de que las pruebas allegadas no ameritaban práctica por cuanto son las documentales obrante en el expediente, se dispuso ingresar el expediente al despacho a efectos de emitir sentencia anticipada.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Sea lo primero decir, que surtido el trámite pertinente, es procedente dirimir de fondo el litigio, puesto que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos en el presente proceso y, además no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuación surtida.

2. En torno a la sentencia anticipada, establece el artículo 278 del Código General del Proceso, que los jueces están en la obligación de emitirla, cuando se presente cualquiera de las hipótesis allí contempladas.

La primera de ellas hace relación a la solicitud que las partes eleven de manera conjunta, sin importar que ésta obedezca a iniciativa propia o por sugerencia del juez. La segunda implica una verificación por parte del operador judicial del expediente y en caso de que advierta que en el litigio no hay pruebas que practicar, deberá proceder a la emisión de la sentencia respectiva. La última de las hipótesis contempladas en la norma, impone al juzgador la emisión de la providencia anticipada cuando se establezca la prosperidad de la excepción de cosa juzgada, caducidad, transacción, prescripción extinción o carencia de legitimación en la causa.

En el presente caso, se configura la segunda de las hipótesis estudiadas, pues, del escrito introductor y su contestación se desprende que como medios de convicción a valorar solamente son los documentos aportados, los cuales, claramente no ameritan práctica alguna, pues se encuentran incorporados en el legajo y fueron sometidos al traslado de rigor para su contradicción.

En lo que atañe a la hipótesis que aquí se configura, la Sala de Casación Civil se ha pronunciado, y ha establecido que su aplicación no genera la vulneración de los derechos de las partes, por el contrario, ha advertido que la emisión de tal proveído representa la agilidad en la resolución de los asuntos judiciales, lo que evidentemente refleja la efectividad de la garantía fundamental al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Al respecto, en proveído SC-4536 del 22 de octubre de 2018, el alto tribunal, en ponencia del H. magistrado Luis Alonso Puerta Rico explicó:

“Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva supone la pretermisión de fases procesales previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está justificada en la realización de los principios de celeridad y economía que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de definición de la litis.

De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la

que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane”.

3. Hechas las anteriores precisiones, y verificado por parte del despacho al momento de librarse la orden de pago, no solo la satisfacción de los requisitos contenidos en el 422 del Código General del Proceso, sino además aquellos expresamente contemplados en el artículo 709 del Código General del Proceso, se procede a la resolución de la excepción planteada en defensa de los intereses del deudor.

Al respecto, recuérdese que el *curador ad litem*, doctor Germán Suarez Montañez, solicitó que se declarara la prescripción de la obligación, pues en su criterio la obligación reclamada se encuentra prescrita, toda vez que entre el tiempo en que se presenta la demanda, el 12 de agosto de 2016, y el tiempo en que lo notifican como *curador ad litem*, el 16 de septiembre de 2019, transcurre un lapso de tres (3) años y treinta y dos (32) días, lo cual es suficiente para que se presente dicho fenómeno jurídico.

3.1. Pues bien, con el fin de verificar la procedencia del medio exceptivo invocado, ha de recordarse que el artículo 2513 del Código Civil señala que aquel “*que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio*”. Al paso de lo anterior, el precepto 2535 de la misma codificación indica que la prescripción que extingue las acciones o derechos de otros, exige sólo el transcurso de cierto tiempo que en cada caso es fijado expresamente por el legislador.

No obstante, si bien el transcurso del tiempo implica el acaecimiento del fenómeno prescriptivo; el artículo 2539 del Código Civil, también señala que aquel puede interrumpirse de manera *natural* o *civil*; la primera por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, o tácitamente; y la segunda por la presentación de una demanda ante la jurisdicción correspondiente.

Ahora, en tratando de prescripción de la acción cambiaria, predicable única y exclusivamente de títulos valores, el artículo 789 del Código de Comercio indica que es de tres años, contados a partir del vencimiento de la obligación.

Al paso de lo anterior, y frente a la interrupción de la prescripción de manera civil, establece el artículo 94 del C.G.P. que “*la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el mandamiento ejecutivo, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término—expresa in fine la norma- los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.*”

En cuanto al conteo del término establecido en la referida normatividad, antiguamente incluido en el artículo 90 del CPC, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desde el 2014 se ha pronunciado y de manera insistente ha sostenido que esta no es una labor en la que única y exclusivamente debe tenerse en consideración el transcurrir del tiempo, sino que además debe acudirse a criterios subjetivos tales como la diligencia de la parte demandante al agotar la notificación de su contraparte y, además de ello, la gestión evasiva que en algunos casos asumen los demandados con el fin de evitar la materialización de la

notificación, y así lograr que los efectos nocivos del artículo 90 se apliquen a su favor y en contra del ejecutante.

Dicha postura inició a partir de la emisión de la sentencia SC5755 del 25 de febrero de 2014, ocasión en la cual la referida Corporación estudió la forma cómo debía contabilizarse el término de caducidad previsto en el inciso cuarto del artículo 10 de la ley 75 de 1968, según el cual la sentencia que declare la paternidad producirá efectos patrimoniales a favor del hijo siempre que la demanda que al respecto se eleve se presente dentro de un plazo no superior a los dos años siguientes al fallecimiento del padre y/o madre. De manera específica la Corte, después de hacer un recuento de las diligencias que el extremo demandante adelantó para lograr la notificación de los convocados, indicó:

“Los anteriores elementos de prueba, en suma, permiten concluir sin lugar a dudas que no fue por negligencia de la actora que el auto admisorio de la demanda se notificó a los representados por Fredesminda Cortés por fuera del bienio consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, pues quedó demostrado que su apoderada fue supremamente diligente al pagar todos los intentos de notificación y al impulsar dicho trámite; en tanto que fue la persistente renuencia de la demandada a notificarse del auto admisorio –a pesar de tener conocimiento de la existencia del proceso en su contra–, lo que condujo, finalmente, a la demora de la aludida diligencia.

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia; lo que apareja como resultado tener que admitir que la presentación de la demanda dentro del bienio consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, impidió que operara la caducidad, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte en múltiples oportunidades”.

Ahora bien, a pesar de que dicha postura tuvo origen en un proceso de filiación, lo cierto es que interpretación de tales características ha sido extendida a los juicios ejecutivos, a través de pronunciamientos emitidos por el mismo órgano judicial en sede constitucional. Al respecto, en sentencia STC1688-2015 la Sala de Casación estudió una tutela presentada por un ejecutante a quien la sentencia le había resultado desfavorable por cuanto se había declarado próspera la excepción de prescripción formulada en su contra. En dicha ocasión la Corte si bien estimó improcedente el amparo, lo cierto es que, haciendo alusión a la sentencia de casación cuyos apartes se citaron con anterioridad, aprovechó la oportunidad para reiterar que el conteo del término establecido en el artículo 90 del CPC, actualmente reproducido en el artículo 94 del CGP, era de carácter subjetivo.

De manera específica indicó:

“Ahora, si bien es cierto que la Colegiatura criticada incurrió en una imprecisión doctrinal al implícitamente considerar que también transcurre de manera objetiva el lapso de un año previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para interrumpir de manera civil la prescripción, no obstante que la jurisprudencia ha indicado que deben ser descontados aquellos espacios de tiempo en los cuales la parte demandante fue diligente en aras de vincular al litigio a la parte demandada y no lo logró por causas atribuibles a la administración de justicia o incluso a la actitud asumida por su contraparte para evadir la notificación, tal falencia carece de trascendencia ius fundamental porque de cualquier forma el fenómeno extintivo bajo estudio de la acción cambiaría ejercida por la acá demandante ocurrió.”

En la sentencia STC9521 de 14 de julio de 2016, la Corte volvió a tocar el tema en un caso en el cual el juez de primer grado había declarado la prosperidad de la excepción de prescripción, pues la notificación del demandado se materializó fuera del año establecido en el artículo 94 del CGP y después de que se cumplieran los tres años siguientes a la exigibilidad de la obligación. Apelada la referida determinación, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga revocó tal determinación, pues acudiendo al conteo subjetivo, estimó que el demandante había intentado en por lo menos una ocasión materializar el enteramiento de su oponente. En dicha ocasión la Corte confirmó el amparo que a favor del ejecutado había concedido el Tribunal de Barranquilla, pues si bien la decisión del juez del circuito se fundamentó en el criterio subjetivo avalado por la alta Corporación, lo cierto es que en realidad el proceder del ejecutante no fue diligente, toda vez que procuró el enteramiento de su contraparte cuando ya se había cumplido la oportunidad prevista en el artículo 94 del CGP.

Al respecto, indicó la Sala de Casación Civil lo siguiente:

“Norma de la que se desprende que los requisitos para que se configure la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda son tres: i.) el adelantamiento de un proceso mediante la formulación de la correspondiente demanda, o sea aquel acto incoatorio o preparatorio del juicio con que el acreedor ejercita su derecho; ii.) proferimiento del mandamiento ejecutivo antes del transcurso del tiempo señalado por la ley para el perfeccionamiento de la prescripción; y c.) que dentro del año siguiente al de la notificación por estado al demandante del auto que contiene la orden de pago, se realice la notificación de éste al demandado, bien de manera personal o a través de curador ad-litem. Si se cumplen estos requisitos se tendrá como fecha de interrupción la de la presentación de la demanda de lo contrario será la de notificación personal al demandado.

De manera que es claro que la interrupción civil no se consuma con la mera interposición de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que como lo ha señalado esta Corporación, «el retardo en notificar a éste no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda». (Subrayas y negrillas fuera de texto) (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág. 132; 2318, pág. 120)

En síntesis, la ley estableció que si el actor incumple de manera culposa la carga procesal impuesta de impulsar el proceso en orden a notificar dentro del término del año a la pasiva del mandamiento de pago, no se puede beneficiar con la interrupción de la prescripción.

Ahora bien, en el caso bajo estudio se encuentra que el mandamiento de pago se libró el 20 de agosto de 2009, decisión que se notificó por estado el 24 del mismo mes y año, por lo que el demandante, contaba hasta el 24 de agosto de 2010, para notificar a su contraparte y hacer efectiva la interrupción civil.

Sin embargo el ejecutante, de manera descuidada, intentó la notificación sólo hasta el 9 de mayo de 2011, al cancelar los aranceles para que se llevara a cabo el enteramiento, esto es cuando ya había vencido el término antes señalado, dejando pasar el tiempo establecido por la Ley, sin que exista justificación de dicho comportamiento incurioso”.

Los pronunciamientos antes citados, posteriormente fueron reiteradas al resolver los asuntos que se publicaron en la relatoría de dicha Corporación bajo los radicados STC6500 del 18 de mayo de 2018, STC7933 del 20 de junio de 2018, STC14529 del 7 de septiembre de 2018, STC2776 de 6 de marzo de 2019 y STC10184 de 1 de agosto de 2019.

Visto de ese modo el asunto, de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales anteriormente citados, ha de precisarse que la prescripción no es un fenómeno en el que única y exclusivamente ha de tenerse en cuenta el mero paso del tiempo - criterio objetivo-, pues presentada la demanda antes de que ésta se configure, para que la parte ejecutante pueda beneficiarse de la interrupción civil, es su deber adelantar de manera diligente las gestiones necesarias para lograr la notificación de su oponente dentro del año establecido en el artículo 94 del CGP, y solo en caso de que tal acto no se agote dentro de dicho lapso, deberá el juzgador acudir a un criterio subjetivo, cual es la valoración del laborío que con tal fin desplegó el demandante.

Pero desde luego, que tal como se desprende del contenido de la sentencia STC9521-2016, no cualquier acto puede tenerse como suficiente para estimar que el proceder del ejecutante fue diligente, debe acreditarse que a pesar de los muchos intentos adoptados por aquel para que la notificación se surtiera, ésta no pudo agotarse durante el año siguiente a la notificación por estado del mandamiento de pago porque el ejecutado adoptó una actitud evasiva y a través de maniobras fraudulentas y contrarias a la lealtad procesal evitó la recepción de los citatorios.

3.2. Entonces, aplicados los anteriores criterios jurisprudenciales y una vez evaluado el proceder de la entidad demandante, posible es afirmar que la excepción de prescripción no ha de prosperar, por cuanto acudiendo a los criterios objetivos y subjetivos, viable es afirmar que el segundo de estos no se cumple, como pasa a explicarse.

En el presente caso la entidad demandante pretendía el pago de una obligación cuya exigibilidad estaba prevista para el 25 de julio de 2016¹. Luego, la demanda a través de la cual procuró el referido pago, se presentó el 12 de agosto de 2016²; correspondiendo por reparto al Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Civil Municipal de esta ciudad quien profirió el mandamiento de pago que se le notificó a la entidad ejecutante el 23 de agosto de 2016³, así, para que la demanda interrumpiera efectivamente la prescripción, era necesario que aquel lograra la notificación del extremo demandado antes del 23 de agosto de 2017.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que una vez se le notificó el mandamiento de pago a la parte demandante, ésta, mediante escrito radicado el 26 de septiembre de 2016 solicitó al despacho se ordenara el emplazamiento del convocado⁴, por cuanto, tal como se observa en el expediente, luego de remitir el citatorio establecido en el 292 del CGP, se evidenció que la dirección a la cual se enviaba, no existe⁵.

¹ Folio 9.

² Folio 18.

³ Folio 19.

⁴ Folio 35.

⁵ Folio 25.

Posteriormente, más de cinco (5) meses después de que la accionante haya solicitado ante el despacho se ordenara el emplazamiento, procedió a volverlo a solicitarlo⁶, por cuanto el anterior no había sido acatado por el despacho que en ese momento conocía del asunto, el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Civil Municipal.

En ese orden, es evidente que la parte accionante mostró diligencia en proceder a notificar al demandado, por cuanto lo hizo en el mes siguiente a que se le notificaran del auto de apremio, distinto es que no lo haya logrado por cuanto la dirección que informó en el escrito de demandada, como ya dijo, es inexistente. Así que, acudió de manera pronta a solicitar el emplazamiento del convocado, tal como se evidencia que lo hizo en el mes siguiente a que se librara referido mandamiento.

De esta forma, el lapso de tiempo comprendido entre el 26 de septiembre de 2016, momento en el cual la accionante solicitó ordenar el emplazamiento, y el 9 de marzo de 2017, momento en el cual el juzgado procedió a ordenarlo⁷, no se le puede imputar en contra de la parte demandante, como quiera que esta tardanza, en una labor indispensable para continuar el proceso y notificar a la parte demandada, no se debió a su actuar.

Incluso, se observa que la apoderada de la parte activa tuvo la diligencia de solicitar, por segunda vez, dentro de este periodo de tiempo, que se ordenara al emplazamiento, en razón, muy seguramente, a que la primera solicitud no había sido acatada, pues se observa que entre los folios 35 y 37 no hay pronunciamiento alguno por parte del juzgado que venía conociendo del caso.

Posteriormente, la parte accionante allegó la constancia de publicación del emplazamiento y solicitó por primera vez nombrar *curador ad litem*⁸, lo cual es asignado y reasignado en tres ocasiones⁹ sin que en ninguna de ellas se halla podido nombrar el curador. También en cuatro oportunidades se observa que la apoderada judicial de la parte demandante se acerca al despacho para solicitar se designe un nuevo *curador ad litem*¹⁰, por cuanto, en todos los casos, el anterior designado, no dio cumplimiento a su labor encomendada.

Incluso, se observa que una de las solicitudes para que nombraran nuevo curador no fue atendida por el despacho, esto es, la solicitud presentada el 4 de diciembre de 2017¹¹, por cuanto, nuevamente, entre folio 44 y 45, no hay pronunciamiento alguno por parte del despacho que veía conociendo del proceso anterior a este; lo cual llevo a que la accionante presentara nueva solicitud el 6 de abril del año siguiente¹².

En punto a lo anterior, se advierte que el proceder de la ejecutante estuvo cobijado por la diligencia en su actuar, tanto en el primer año posterior que se le notificara el auto que libró mandamiento de pago, como en el resto del proceso, tiempo en el cual se produjo, el 25 de julio de 2019, la prescripción del título valor contenido en el expediente.

⁶ Folio 37.

⁷ Folio 38.

⁸ Folio 41.

⁹ Folios 42, 46 y 69.

¹⁰ Folios 41, 44, 45 y 55.

¹¹ Folio 44.

¹² Folio 45.

En consecuencia, no se le puede señalar a la parte demandante por la tardanza en tener por notificado al *curador ad litem*, pues, no hay un nexo causal entre las varias veces que los curadores designado por el despacho, que inicialmente venía conociendo del proceso, faltaron a su labor de notificarse y el actuar de la parte accionante. Además, es evidente que la apoderada judicial de la entidad bancaria demandante no presentó una actitud de dejadez dentro del proceso, sino todo lo contrario, pues, con cierta constancia, solicitaba al despacho se reasignara curado para poder seguir adelante con la ejecución.

Fue luego que, cuando el expediente llegó a este despacho¹³ se procedió designar nueva terna para nombrar curador¹⁴, se enviaron los telegramas correspondientes en dos ocasiones¹⁵, y por fin se pudo tener por notificado al curador¹⁶.

4. Así las cosas, es evidente que, desde un criterio objetivo, (i) no fue posible interrumpir la prescripción del título valor en cuestión con la notificación a la parte accionada dentro del año siguiente a la notificación que del mismo se hizo a la parte demandante, como lo indica el artículo 94 del CGP, y (ii) tampoco fue posible realizar la notificación, del referido auto, antes de que acaeciera el fenómeno de la prescripción, el 25 de julio de 2019.

No obstante, desde un punto de vista subjetivo, como lo exige la Corte Suprema de Justicia, no es posible decretar la prescripción de la obligación en este caso, como quiera que la tardanza en la notificación del curador *ad litem* no es atribuible a la parte accionante y, al mismo tiempo, presentó, con cierta regularidad, la diligencia debida para promover el avance del proceso.

5. Así las cosas, siendo evidente que el fenómeno prescriptivo no cobijó la obligación aquí ejecutada, se procederá a negar su declaración.

IV. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar **NO PROBADO** el medio de defensa formulado por la *Curador Ad-Litem* del demandado, doctor Germán Suarez Montañez, denominado “**PRESCRIPCIÓN**”.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución en contra la parte ejecutada, conforme a los términos del mandamiento de pago.

TERCERO: PRACTICAR la liquidación del crédito, dando cumplimiento al artículo 446 del Código General del Proceso.

¹³ Folio 73.

¹⁴ Folio 73.

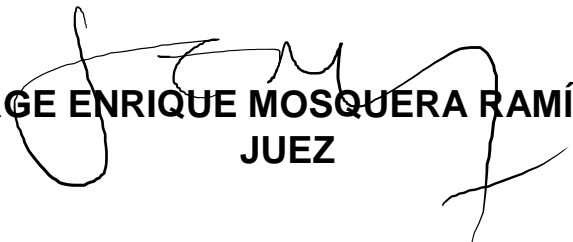
¹⁵ Folios 74 a 76 y 85 a 87.

¹⁶ Folio 88.

CUARTO: DECRETAR el avalúo y posterior remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del presente proceso y los que en el futuro fueren objeto de cautela.

QUINTO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada. Por secretaria procédase a liquidar las costas procesales, incluyendo como agencias en derecho la suma de **\$1.534.000.00 M/CTE.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JORGE ENRIQUE MOSQUERA RAMÍREZ
JUEZ

Firmado Por:

Jorge Enrique Mosquera Ramirez

Juez

Civil 054

Juzgado Municipal

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

87cdeb5b446be8546f87561c1f616960024dc073cb4b74cd81638afa47f84eca

Documento generado en 02/08/2021 05:16:28 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



República de Colombia
Rama judicial del Poder Público
Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá

NOTIFICACIÓN POR ESTADO: la providencia anterior es notificada
por anotación en ESTADO No. 91 hoy 3 de AGOSTO de 2021

El (la) Secretario (a) 
JORGE EDISSON PARDO TOLOZA